

DIARIO OFICIAL

TOMO 86

San Salvador, viernes 27 de junio de 1919

NUM. 145

SECCION OFICIAL

PODER LEGISLATIVO

La Asamblea Nacional Legislativa de la República de El Salvador,

CONSIDERANDO: que se ha traído a la vista el acuerdo del Poder Ejecutivo fechado el nueve de abril del año en curso y publicado el mismo día en el "Diario Oficial", acuerdo que reduce a cinco centavos oro por kilo el impuesto aplicable a la introducción del petróleo para alumbrado o aceite de kerosina y cuya misma providencia señala a la gasolina y al aceite de gasolina el impuesto de cinco centavos oro por kilo.

CONSIDERANDO: que ambos impuestos aparecen inspirados en razones de equidad, pues el primero se reduce en beneficio de las clases proletarias, y el segundo se establece a cargo de las clases acomodadas que son las principales consumidoras de gasolina, la cual ocupan en sus automóviles y motores; pero en cambio debe tomarse en cuenta, en lo que a gasolina y aceite de gasolina se refiere, que dicho producto, a consecuencia de la guerra europea, cuyos efectos todavía se sienten intensamente, aumentó en alto grado de precio, no habiendo hasta la fecha descendido perceptiblemente de valor, si se admite el aforo en cuestión, resultaría la gasolina con muy alto valor en plaza con manifiesto perjuicio de los transportes por carros automóviles, cuyo incremento debe favorecerse en provecho del comercio y de la industria; que, en consecuencia, no es oportuno conceder la aprobación del impuesto que se pretende aplicar a los productos a que este párrafo se refiere.

POR TANTO:

En uso de sus facultades constitucionales,

DECRETA:

Art. 10.—Apruébase el acuerdo aludido del Supremo Poder Ejecutivo, en cuanto se reduce el impuesto señalado al aceite de kerosina o petróleo para alumbrado, a cinco centavos oro por kilo; y reformase el mismo acuerdo en el sentido de que la gasolina y el aceite de gasolina continuarán introduciéndose al país, libres de impuesto de importación. Se hace notar que debiendo entrar en vigencia el Acuerdo Ejecutivo citado, el día primero del entrante julio, no se han hecho hasta el día de hoy registros en que se haya cobrado aforo a la gasolina y aceite de gasolina y, por consiguiente, es lógico establecer que dichos productos continuarán expendiéndose en el país con su precio normal.

Art. 20.—Este Decreto tendrá fuerza legal desde el día primero de julio del año corriente.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo. Palacio Nacional: San Salvador, a veintitrés de junio de mil novecientos diez y nueve.

Salvador Flores,
Vicepresidente.

Luis Revelo,
1er. Srío.

R. Quintanilla,
2o. Pro-Srío.

Palacio Nacional: San Salvador, 24 de junio de 1919.

Publíquese.

Jorge Meléndez.

El Secretario de Estado en los Despachos de Hacienda y Crédito Público,

José E. Suay.

PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Por haber salido errado, en el "Diario Oficial" de 24 del corriente, se publica de nuevo el siguiente Decreto:

El Poder Ejecutivo, en uso de la facultad que le confiere la fracción 12ª del Art. 91 de la Constitución Política, DECRETA el siguiente

REGLAMENTO DE FRANQUICIAS TELEFONICAS

Artículo 10.—Para la mejor administración de los diversos servicios de la República, serán instalados oficialmente aparatos telefónicos en los despachos u oficinas de los funcionarios que más adelante se expresan, los cuales serán conocidos con el nombre de *aparatos oficiales*.

Art. 20.—Los aparatos oficiales serán de tres clases:

De franquicia *general*, cuyas comunicaciones, aun las privadas, serán consideradas como oficiales. Tales serán los de los funcionarios siguientes: Presidente y Vicepresidente de la República; Ministros y Subsecretarios de Estado; Diputados al Congreso Legislativo, durante el período de las sesiones; Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Mayor e Inspector General del Ejército.

De franquicia *semigeneral*, en los cuales sólo podrán tener comunicaciones privadas, francas, los funcionarios a cuyos servicios se hubieren instalado. Tales serán: los de los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia y Cámaras Seccionales; Presidente del Consejo Superior de Salubridad; Contador Mayor y Municipal; Tesorero General; Jefe del Estado Mayor Central del Ejército; Directores Generales de cada uno de los diferentes servicios administrativos; Gobernadores Políticos, y Comandantes de Departamento y de Puerto.

De franquicia *limitada*, en los cuales sólo deberán tenerse como francas las comunicaciones relacionadas con el cargo del funcionario, a cuyo servicio se hubiere hecho la instalación. Tales serán los de las oficinas de los demás funcionarios no expresados en los dos párrafos anteriores, y que por su importancia relativa, el Gobierno hubiere concedido el privilegio de instalación oficial.

Art. 30.—Los funcionarios que gocen del privilegio de franquicia general tendrán derecho a la instalación oficial de uno o dos aparatos, en sus habitaciones privadas.

Art. 40.—Los funcionarios que gozan del privilegio de franquicia semigeneral no tendrán derecho más que a la instalación de un aparato oficial en sus habitaciones privadas.

Art. 50.—Los funcionarios con franquicia

limitada no tendrán derecho a ninguna instalación oficial en sus habitaciones privadas; pero sí tendrán derecho a que se les franqueen, de cualquier aparato, las comunicaciones que pretendan, relacionadas con los cargos que desempeñen.

Igual derecho tendrán los empleados titulares de oficinas públicas que no gozan del beneficio de instalación oficial.

Art. 60.—Quedan terminantemente prohibidas las instalaciones oficiales en las habitaciones de las personas no comprendidas en el Art. 20.

Art. 70.—Por regla general, conviene utilizar la vía telefónica, oficialmente, sólo con manifiesta necesidad. *Esto hará que las líneas estén siempre expeditas para llenar su objeto, cual es el de beneficiar a la generalidad.*

Art. 80.—El beneficio de franquicia puede dar lugar a abusos o contravenciones:

Habrá abuso:

10. Cuando de los aparatos con franquicia general se sostienen prolongadas e inútiles conversaciones.

20. Cuando los funcionarios con el derecho de franquicia semigeneral, toman a su cargo, para ventilarlos por teléfono, asuntos que, sin inconveniente alguno, pudieran cursarlos, por su propia cuenta, los interesados particulares; y

30. Cuando de los aparatos con franquicia limitada se tienen comunicaciones de dudoso carácter oficial.

Hay contravención siempre que de los aparatos con franquicia semigeneral, tengan comunicaciones privadas, personas particulares; y cuando de los teléfonos con franquicia limitada se tengan comunicaciones evidentemente privadas.

Art. 90.—Los telefonistas, bajo su más estricta responsabilidad, tienen obligación de dar parte a su jefe inmediato, de todas las comunicaciones abusivas que cursen por las líneas de su cargo; anotando escrupulosamente el número del aparato de origen, la fecha y hora en que tuvieron lugar, el nombre de las personas que conversaron, si esto fuere posible, y el tiempo que duró la conversación.

Estos datos serán comunicados al Director General para que, por su medio, sea llamada la atención al titular del aparato, por medio del cual se ha cometido el abuso.

Art. 10.—Las comunicaciones en contravención serán cortadas inmediatamente que sean advertidas, y el titular del aparato, notificado de que tal conducta es prohibida; pudiendo el Director General suspenderle el servicio, si el mal no pudiese ser remediado de otro modo.

Art. 11.—Los titulares de aparatos con franquicia general o semigeneral, tendrán derecho a que las oficinas citen, por medio de sus mensajeros, a las personas con quienes deseen hablar.

Art. 12.—Pueden atenderse solicitudes de particulares para comunicaciones francas con aparatos que gozan de franquicia general o semigeneral, siempre que los interesados presenten constancia telegráfica o postal, firmada por el titular del aparato, haciendo la citación.

Art. 13.—Los funcionarios que recla-

men comunicaciones francas, están obligados a dar su nombre y título (del derecho de franquicia), cada vez que las oficinas así lo exijan; no pudiendo verificarse la conexión, si el interesado rehusare cumplir con este requisito, a menos que sea reconocido.

Art. 14.—Los funcionarios que gozan de franquicia general o semigeneral pueden comunicar, con el mismo carácter, de cualquier aparato u oficina.

Art. 15.—Los Diputados al Congreso Legislativo no tendrán derecho a que los aparatos instalados o que se les instalen, sean considerados como oficiales; pero, durante el período de las sesiones de la Asamblea, podrán ser francas las comunicaciones que ellos tuvieren, no sólo de los aparatos referidos, sino de cualquier otro aparato u oficina. También podrán ser francas las comunicaciones que con ellos tuvieren sus familiares más cercanos (padres, esposa e hijos).

Art. 16.—En lo sucesivo, no será atendida ninguna orden de instalación telefónica oficial, si el interesado no presenta constancia escrita; extendida por el Ministerio de Gobernación.

Art. 17.—En el servicio telefónico, con el derecho de franquicia, cualquiera que sea su clase, termina al cesar en sus funciones el titular, sea por sustitución temporal o definitiva. En consecuencia, el Director General hará desmontar las líneas y los aparatos respectivos, y lo comunicará a las oficinas que convenga.

Art. 18.—Quedan derogados los artículos del 46 al 50 inclusive, del Reglamento de Teléfonos vigente, y todas las otras disposiciones que se opongan a éste.

Dado en el Palacio Nacional: San Salvador, a los diecisiete días del mes de junio de mil novecientos diecinueve.

Jorge Meléndez.

El Subsecretario de Gobernación,

A. Argüello L.

SECRETARÍA DE FOMENTO

Palacio Nacional:

San Salvador, 21 de junio de 1919.

Vista la solicitud del General José Tomás Calderón, ex Gobernador del departamento de San Miguel, referente a que un contrato de pedido de una estatua del difunto mentor salvadoreño, doctor Antonio Rosales, sea considerado como celebrado entre el Gobernador del mismo departamento de San Miguel y el señor don Valentín Sesti. || Tomando en consideración: Que en este Ministerio existe la contrata del siguiente tenor literal: "En la ciudad de San Salvador, a las diez de la mañana del dos de enero de mil novecientos dieciocho. || I. Valentín Sesti, se compromete a pedir al exterior una estatua de mármol blanco de Carrara que represente la figura del doctor Antonio Rosales, conforme al dibujo aprobado, la cual será colocada sobre el pedestal de cemento armado que construirá el señor Sesti, en el parque "Antonio Rosales", de la ciudad de San Miguel, sobre el basamento o socalo que construirá al efecto el General Calderón. || II. El alto de la estatua será de un metro setentecincos centímetros, y el del pedestal, también de un metro setentecincos centímetros. || III. El señor Sesti, presentará al señor General Calderón o a la persona que éste designe, antes de hacer venir la estatua, las fotografías del modelo, para su aprobación. || IV. El señor Sesti entregará

el pedestal y las dos lápidas que éste tendrá al frente y atrás, con las inscripciones debidas, las cuales serán de mármol, en el curso de tres meses, contados desde la terminación del basamento antes mencionado. Este basamento será de mampostería y tendrá cinco metros por lado y un metro cincuenta centímetros de alto. La estatua la entregará el señor Sesti, ya colocada sobre el pedestal, en el curso de diez meses de firmado este contrato, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor. || V. Todo el monumento, que comprende el basamento que se construirá, el pedestal, las dos lápidas y la estatua por cuenta del señor Sesti, serán ejecutados de conformidad con el diseño en escala métrica de uno a diez, y aprobado por ambas partes y que se adjunta al presente contrato. || VI. El General reconoce al señor Sesti, por todo valor de la estatua, el pedestal y las dos lápidas, la suma de cuatro mil ciento sesenta pesos, que le serán pagados en dos contados: el primero por dos mil ochenta pesos (\$2,080.00), al ser firmado el presente contrato; y el segundo, por el resto de dos mil ochenta pesos (\$2,080.00), al entregar el señor Sesti la estatua ya colocada sobre el pedestal. || VII. No son de cuenta del señor Sesti el desembarque, muellaje y derechos, impuestos y gastos de aduana de la estatua y todo impuesto que hubiere sobre su introducción. || En fe de lo cual firmamos el presente contrato por triplicado. || Con autorización del General José Tomás Calderón || Cecilio Bustamante. || V. Sesti".

Que de la contrata trascrita no aparece que el General Calderón haya accionado en concepto de Gobernador, ni con autorización alguna, pues si bien el doctor Cecilio Bustamante, Ministro de Fomento en aquella época, firmó con autorización del General José Tomás Calderón, esto no induce, por sí sólo, a considerar que las personas referidas hayan firmado, o autorizado para hacerlo, en su carácter de funcionario, toda vez que no se lee ninguna cláusula que así lo indique y del tenor del repetido contrato se desprende que la firma y autorización fue en el carácter personal.

Pero que el vicio o defecto apuntado en el párrafo anterior desaparece o queda subsanado con el trámite dado por este Ministerio a la solicitud del General Calderón, trámite por el cual aparece que la Alcaldía de San Miguel "carece de datos precisos; pero sí tiene conocimiento que la iniciación de la erección de la estatua, fue sin acuerdo ni autorización de ninguna autoridad superior, pues no hay Decreto del Ejecutivo, ni de la Asamblea ni de la Municipalidad, a este respecto. Esa obra pues, fue iniciada por el General José Tomás Calderón, con fondos propios del pueblo miguelense, y con fondos municipales, para lo cual el General expresado, levantó una suscripción entre los vecinos del Departamento y maestros de escuela de la República" y que el terreno en que está el Parque Rosales es de propiedad municipal, según las escrituras correspondientes que conserva aquel Municipio.

Que de conformidad con el número 1 del Art. 35 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo, es de la competencia de la Secretaría de Fomento la construcción, conservación y reparación de obras públicas, edificios y monumentos nacionales.

Que es un deber del Estado rendir el debido tributo de homenaje a la memoria ilustre de personas que, como el doctor Antonio Rosales, dedicó sus energías en pro de la Patria cumpliendo con el sagrado precepto de enseñar al que no sabe.

Por tanto, el Poder Ejecutivo, por las ra-

zones y ley citada, ACUERDA: declarar, como monumento nacional la estatua contratada por el señor Sesti para perpetuar la memoria del esclarecido ciudadano doctor Antonio Rosales, en consecuencia, ordena: que de los eventuales del Ramo de Fomento se pague al señor don Valentín Sesti, la suma de dos mil doscientos cuarenticuatro pesos, al entregar la estatua ya colocada sobre el pedestal.

Dese conocimiento al Ministerio de Hacienda de esta disposición para los efectos de la cláusula séptima del contrato relacionado.—Comuníquese.

(Rubricado por el señor Presidente).

El Subsecretario de Fomento,

Argüello L.

Palacio Nacional:

San Salvador, 26 de junio de 1919.

En vista de la renuncia que ha presentado el señor doctor José Romero, del cargo de quinto vocal de la Junta de Progreso Urbano de la ciudad de Cojutepeque, el Poder Ejecutivo ACUERDA: aceptársela, rindiéndole las gracias por los servicios prestados.—Comuníquese.

(Rubricado por el señor Presidente).

El Ministro de Fomento,

Molina.

SECRETARÍA DE GUERRA

Palacio Nacional:

San Salvador, 24 de junio de 1919.

A propuesta del señor Juez respectivo, el Poder Ejecutivo ACUERDA: nombrar: escribiente del Juzgado Militar de la Primera División del Ejército, al señor Br. don Ezequiel Aguilar, en sustitución de don Carlos Alberto Liévano, que renunció y a quien se dan las gracias por los servicios prestados. El nombrado devengará el sueldo de su antecesor, desde el dieciséis del corriente, fecha en que se hizo cargo de su empleo, debiendo estar asimilado al grado de subteniente del Ejército, para mientras dure su actuación como tal escribiente, de conformidad con los Arts. 249 y 250 del Código de Justicia Militar.—Comuníquese.

(Rubricado por el señor Presidente).

El Ministro de la Guerra,

Romero Bosque.

SECRETARÍA DE JUSTICIA

Palacio Nacional:

San Salvador, 25 de junio de 1919.

A propuesta del Ministerio de Hacienda, el Poder Ejecutivo ACUERDA: nombrar representante del Fisco, para que intervenga en el cobro del impuesto de sucesiones del distrito de Santiago de María, al doctor don Daniel Quirós, en lugar del doctor don Fernando Castillo, que actualmente está domiciliado en la ciudad de Berlín.—Comuníquese.

(Rubricado por el señor Presidente).

El Subsecretario de Justicia,

Gallegos.

DOCUMENTOS OFICIALES

Ministerio de Justicia.—Palacio Nacional:
San Salvador, 27 de junio de 1919.

Señores Secretarios:

Al amparo del Art. 73 de la Constitución Política, tengo la pena de devolver a Uds.,